

Las mujeres en la economía mundial: Problemas, roles y abogacía

POR NADIA JOHNSON.

Durante años, los grupos femeninos de abogacía han seguido, analizado y desarrollado alternativas a las políticas macroeconómicas que perjudicaron sus existencias y comunidades. Ligadas con experiencias semejantes y reconociendo su subrepresentación en varios foros de toma de decisiones económicas, las mujeres buscaron activamente transformar la corriente económica mediante alianzas y redes en los ámbitos nacional e internacional. Los resultados de tales esfuerzos se ven reflejados en un sin número de tratados internacionales y de reformas nacionales llamando a la igualdad entre hombres y mujeres, y a una sostenibilidad social, económica, política y ambiental.

En la mayoría de los procesos de toma de decisiones, sin embargo, la sostenibilidad sigue relegada después del crecimiento-un término agregado y no un cuadro. Las salvaguardias sociales tales como las normas laborales, las medidas de protección del medio ambiente, y los programas de atenuación de la pobreza, están meramente atados a las políticas preexistentes, basadas en el mercado. Y las instituciones que crean y ejecutan las políticas no rinden cuentas a los supuestos beneficiarios. El sistema macroeconómico actual prospera sobre los desequilibrios del poder y la retórica, proclamando que sus planes van a "erradicar la pobreza", mientras que en la práctica, la perpetúan.

Hoy en día, las mujeres se hallan en el puesto delantero de la identificación de los impactos devastadores de este sistema y de su manifestación más ominosa, la mundialización empresarial, soportando el bulto de las consecuencias de años de programas de ajuste estructural (PAE). Dado que las mujeres y los niños pobres son los que padecen más agudamente de los altibajos de los eventos políticos, los militantes sostienen que ellos deberían ser la piedra de toque para considerar la eficacia de las teorías y soluciones del desarrollo.

Este acercamiento echa la base de la manera en la cual las mujeres miran pues al desarrollo en la práctica, la investigación, la abogacía y el análisis.

Las mujeres están en el puesto delantero para identificar los impactos devastadores del sistema macroeconómico, ya que soportaron durante muchos años el bulto de las consecuencias de los programas de ajuste estructural, debilitadores.

Abogando por un sistema mundial sostenible

Las mujeres han participado activamente en la era de la política de desarrollo desde sus inicios durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones aspiraban a reconstruir sus economías destruidas por la guerra, creando instituciones multilaterales tales como las Naciones Unidas. Los defensores de la mujer arguyeron que las necesidades de las mujeres han de ser integradas en todos los programas de toma de decisiones y de desarrollo, desde lo local hasta lo internacional. Los militantes en pro de los derechos de la mujer y los economistas feministas afirmaron durante mucho tiempo que el camino hacia el desarrollo sostenible pasa por una transformación del sistema económico mundial y de la toma de decisiones macroeconómicas. Subrayaron que el clima global está amenazado por severos desequilibrios en la productividad, la movilización de recursos, y la distribución de los bienes y servicios, resultando en parte

de las políticas sesgadas del Banco Mundial y del Fondo monetario internacional (FMI).

El famoso Consenso de Washington promueve un modelo de mundialización económica basado en la desregulación, la privatización de las empresas públicas, y la liberalización financiera y comercial, otorgando una atención secundaria a los costos sociales y ambientales. Está repleto de contradicciones que perpetúan la estratificación, la desigualdad y la injusticia. Las instituciones y políticas supuestamente diseñadas para eliminar la pobreza en los países en desarrollo han servido al contrario a ampliar los mercados y la riqueza de los países desarrollados. Existe una promoción gratuita del desarrollo a través de un paradigma que refuerza los intereses empresariales, a la vez que falta de gestión participativa, transparencia, regulación y rendición de cuentas.

Dentro de este sistema, el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio (OMC) actúan casi como entidades soberanas, implementando políticas y medidas de ajuste estructural llenas de condiciones, así como prácticas de liberalización del comercio que ignoran preocupaciones fundamentales como la protección cultural; la soberanía y la seguridad alimenticia; el medio ambiente; el empleo; los derechos humanos; y las normas de la salud pública. Bajo estas prescripciones, es obvio que el subdesarrollo del Sur global es un resultado directo del desarrollo del Norte global. En un mundo poblado con seis mil millones de habitantes, más de un billón de personas, mujeres en su mayoría, sobreviven con menos de un dólar por día. El sistema actual puede prometer a algunos riqueza y oportunidades sin fin, pero para el resto está perpetuando y ahondando graves desigualdades entre naciones y pueblos.

Un aspecto clave de la mundialización económica ha sido la reorganización del trabajo y de los modelos laborales, junto con una competencia incrementada, una producción internacionalizada e innovaciones tecnológicas 'avanzadas'. Con el cambio de los modelos de la movilidad internacional del trabajo, ha crecido la flexibilidad del empleo, y la composición y estructura por sexo del aporte de la mano de obra han cambiado.

Pero los intentos por parte de los gobiernos en desarrollo de mejorar la eficacia, atraer el capital y la inversión extranjeros, y respetar las condicionalidades externas impuestas por las instituciones financieras internacionales, han inducido a veces a cortes drásticos de los subsidios de precios, de las inversiones públicas en la infraestructura, y de los gastos sociales en la educación, la salud y los servicios públicos. Estos costos sociales fueron orientados hacia el mercado del empleo, donde han desaparecido de los indicadores económicos formales pero se volvieron sumamente obvios para las mujeres trabajadoras, particularmente en los mercados laborales mal pagados.

TCuando los partidarios de las políticas de ajuste estructural mantienen que éstas mejoran la eficacia, de hecho ha florecido la ineficacia. Es evidente, por ejemplo, en la casi invisibilidad de la mayor parte del empleo de las mujeres. La participación de las mujeres en la mano de obra ha aumentado de manera significativa, pero trabajan muy a menudo en empleos informales, en condiciones inseguras, hostiles y humillantes. Un número desproporcionado de ellas todavía son analfabetas y empobrecidas, sin acceso a los recursos, a la educación, a la formación y a los cuidados de salud.

La participación de las mujeres en la mano de obra ha aumentado de manera significativa, pero trabajan muy a menudo en empleos informales, en condiciones inseguras, hostiles y humillantes

El resultado desemejante de la mundialización constituye una clara justificación de un nuevo sistema de gestión económico, uno que garantice una mayor igualdad entre los países, y una gestión más democrática y responsable de parte de las instituciones financieras internacionales. La ONU podría desempeñar un papel crítico, al responder a la necesidad de crear una entidad multilateral para gobernar las instituciones financieras, monetarias y comerciales internacionales a fin de garantizar la coherencia, la participación, la transparencia y la implementación de los compromisos. Como el Consenso de Washington se revela insostenible desde el punto de vista económico, social y político, el reto ahora es desarrollar e implementar una estructura y unas reglas con miras a alcanzar un desarrollo humano que sostenga y beneficie a todos.

Empezó con la macroeconomía

En el proceso en pro de una transformación estructural, las mujeres han conducido análisis sin precedentes sobre los problemas de la política macroeconómica, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la movilización de recursos, el comercio, la asistencia para el desarrollo y la deuda externa. Mostraron cómo unos de los indicadores usados para medir la riqueza (como el PIB) han reducido, o incluso omitido, las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico. Las economistas feministas no sólo han empujado a cambios en los modelos macroeconómicos del crecimiento empleados por organizaciones como el FMI, pero han creado asimismo modelos alternativos que incluyen el género y el empleo no remunerado como variables intervinientes.

Muchos defensores de las mujeres han enfatizado que si bien los gobiernos nacionales son los primeros actores en el desarrollo del sector financiero nacional, asegurando el suministro de servicios sociales y proporcionando los recursos para un desarrollo con cara humana, la mundialización y la liberalización del mercado han puesto severas limitaciones sobre su aptitud a cumplir con estos roles. En lugar de esto, los gobiernos están confrontados con el dilema de crear un ámbito económico 'competitivo' de políticas que provocan una devastación social y económica. Los mercados que fueron liberalizados sin tomar en cuenta las consecuencias han intensificado la subordinación de las mujeres en muchos campos, entre ellos, la alfabetización, la esperanza de vida, y el acceso a la tierra, a la información, a la tecnología y a la educación.

La liberalización misma desalienta el desarrollo de políticas que pudieran ayudar a mitigar sus peores impactos. Los impuestos, por ejemplo, podrían ser un instrumento útil para redistribuir la riqueza y corregir las inequidades sociales, pero la habilidad de los gobiernos de generar impuestos sobre los ingresos está inhibida por el estilo de reformas del FMI y el BM, que favorece predominantemente a los hombres, a las categorías de ingreso mediano a elevado, al mismo tiempo que reduce y elimina los subsidios sobre los productos de base como la leche, el pan y el gas de combustible, con los que sobreviven las comunidades pobres, en particular las mujeres.

La movilización de los recursos internacionales financieros tampoco goza de un enfoque de género. Las políticas e instituciones de inversión afectan en un modo diferente a hombres y mujeres, ya que las mujeres controlan menos del 10 por ciento de los recursos mundiales y ganan menos para un trabajo comparable, y poseen únicamente uno por ciento de la propiedad mundial. Los modelos de movilización de ambos recursos nacionales e internacionales amplían estas disparidades, puesto que las desigualdades existentes limitan la habilidad de las mujeres a aprovechar oportunidades, responder a iniciativas de política o registrar avances productivos en términos de derecho a la tierra,

al crédito y a la tecnología. Las políticas comerciales diseñadas para atraer inversiones extranjeras directas han resultado en zonas de libre exportación, con sus horribles historias de condiciones inseguras de trabajo, particularmente en lo que concierne las mujeres y los niños.

En general, el comercio liberalizado, extendido y propagado bajo el régimen de la OMC, ha contribuido de una manera significativa a debilitar la habilidad de los gobiernos nacionales a regular sus economías y gobernar sus pueblos. Las sociedades transnacionales de las naciones industriales usan la OMC para abrir mercados extranjeros e imponer nuevas directrices tendentes a optimizar los provechos, sin tener en cuenta los costos sociales. Florecieron las limitaciones, reduciendo asimismo la capacidad de los gobiernos de proveer una protección social y los recursos para el desarrollo humano. En algunos lugares, las sociedades transnacionales subordinan a los gobiernos nacionales en el poder, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Pese a su duro impacto sobre la igualdad de género y social, la liberalización del comercio progresa rápidamente, con retos particulares para las mujeres en los dominios de la seguridad alimenticia, la salud y los cuidados de salud, el acceso a los servicios públicos, la diversidad biológica y la tecnología. Medidas restrictivas de inversión también tienen serios impactos para el crecimiento y el desarrollo de las empresas, muy pequeñas y las pequeñas, donde están concentradas las mujeres.

Mientras algunos de los impactos de la liberalización podrían ser aliviados por la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de las naciones desarrolladas a las en desarrollo y con economías en transición, la ayuda disminuyó fuertemente en la última década, y las condiciones para la asistencia siguen siendo sumamente contenciosas. Los gobiernos han firmado numerosos acuerdos internacionales que estipulan que los países desarrollados debían dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la AOD, pero solamente cinco países europeos han alcanzado esta meta. Los Estados Unidos, la nación más rica, también es la más tacaña, desembolsando tan sólo el 0,1 por ciento del PIB cada año.

La asistencia financiera internacional está considerada como un suplemento crítico de una toma de decisiones macroeconómicas racional porque la AOD y otras formas de respaldo juegan un rol significativo en la definición del marco macroeconómico. No obstante, algunas nuevas estrategias importantes que tienen el potencial de mejorar la coordinación de los donadores y la apropiación local de los modelos de desarrollo-como los Cuadros de desarrollo del país (CDP), los Documentos de estrategia de reducción de la pobreza (DERP) y los Acercamientos por sector (APS)-tienden todavía a descuidar las necesidades distintas de ambos sexos. Tal como las políticas de reforma económica en el pasado, estos nuevos acercamientos representan una amenaza de impactos desestabilizadores, particularmente para las mujeres. Han de ser revisados para que apoyen políticas socioeconómicas racionales basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, enfocadas en preocupaciones claves tales como la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, una AOD incrementada y claramente enfocada, no sería suficiente sin atacarse al problema de la deuda. La inversión efectiva de la ayuda descansa sobre una reforma estructural y de la política, que es imposible para países que están estrechamente atados al mismo tiempo por los mandatos del Banco Mundial y del FMI, y severamente azotados por el servicio de la deuda. Cuando la deuda externa sigue creciendo exponencialmente-ya que las corrientes entrantes quedan poco tiempo en el país en comparación con las corrientes salientes para pagar los préstamos-la reducción

de la deuda persiste como un ejercicio de poder y control mediante las políticas de ajuste estructural. Los PAE otorgan la prioridad al reembolso de la deuda en lugar de gastar en pro de la salud, la educación, el saneamiento, agua limpia y otras necesidades sociales. Esto mitiga la responsabilidad de los gobiernos deudores hacia sus pueblos y corroe las instituciones democráticas locales. La corrupción prolifera, puesto que las negociaciones sobre la deuda y el préstamo están llevadas a cabo en secreto entre las elites del Norte y del Sur.

Las propuestas actuales de gestión de la deuda-la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y la PPME reforzada-ofrecen muy poco, demasiado tarde, a muy pocos países, ya que están diseñadas por los acreedores con miras a la recolección de la deuda y no a su reducción. Mientras los planes vigentes de la gestión de la deuda no se convierten en oportunidades de alivio de la deuda que sean efectivas, equitativas, orientadas hacia el desarrollo y sostenibles, el ciclo devastador de la acumulación de la deuda seguirá repitiéndose, condenando a otros millones de personas al sufrimiento. Un número aplastante entre ellas serán mujeres.

Participar donde se toman las decisiones

Detrás de la integración del género en la macroeconomía, se esconde otro reto: asegurar que las mujeres participan plenamente en la formulación de las políticas. Las mujeres están poco representadas a todos los niveles de la toma de decisiones económicas, incluso en términos de abogacía, debido a las limitaciones de los recursos financieros y humanos de las ONG de mujeres. Esta situación persiste a pesar de numerosos acuerdos internacionales que preconizan una participación sobre un mismo pie de igualdad.

La Plataforma de Acción de Beijing estipula que: " Para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, las mujeres y los hombres deben participar plenamente y por igual en la formulación de las políticas y estrategias macroeconómicas y sociales para la erradicación de la pobreza". Asimismo, los signatarios se comprometieron a: "Revisar y modificar, con la participación plena e igualitaria de la mujer, las políticas macroeconómicas y sociales con miras a alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción".

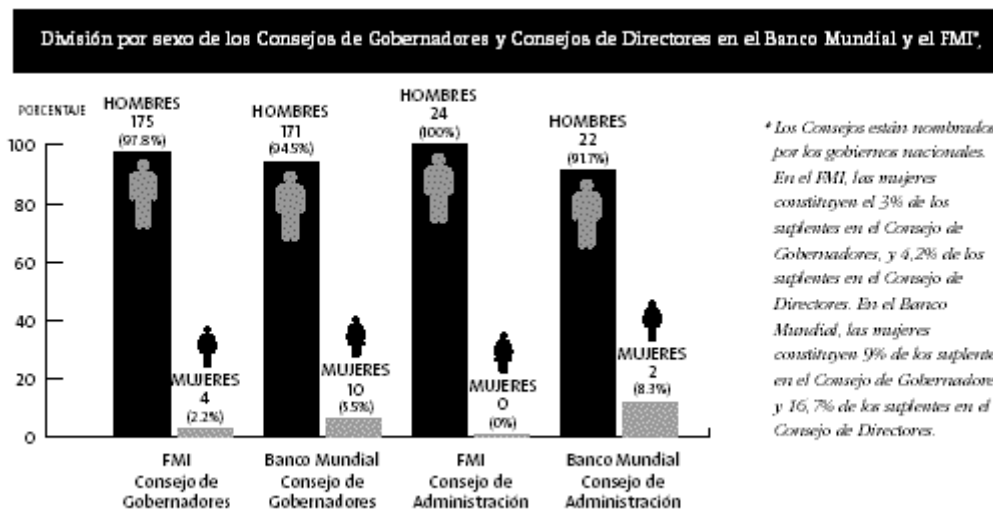
El Consenso de Monterrey acepta que "se integre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo en todos los niveles y todos los sectores". Aunque no haya una referencia directa a la igualdad en la representación por sexo, está relacionada de un modo que no deja lugar a dudas. Además, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW-inglés), un tratado jurídicamente constrictivo adoptado en 1979, y ratificado por 170 países, incluye varios artículos que mencionan específicamente la igualdad de género en los procesos y los organismos de toma de decisiones.

Las cifras hablan por sí mismas

Pese a estos compromisos, las mujeres siguen componiendo sólo el 13 por ciento de los legisladores nacionales y el 14 por ciento de los ministros en el mundo. Entre los dominios de toma de decisiones, la economía y la hacienda son las que tienen los niveles más bajos de representación de la mujer-en todos los países, sólo 28 ministras tienen carteras relacionadas con la economía (incluso hacienda, economía, comercio, desarrollo, industria y agricultura). Es más probable que las mujeres fuesen concentradas

en los dominios llamados livianos tales como la educación, la salud, los asuntos sociales y los recursos humanos. A nivel internacional, el número de mujeres en las estructuras de toma de decisiones de las mayores instituciones internacionales financieras y comerciales también es asombradamente bajo.

En el FMI y el Banco Mundial, el Consejo de administración está compuesto de altos funcionarios gubernamentales, tales como ministros de hacienda y directores del Banco central, y cada país miembro está representado. En el Banco Mundial, el 5,5 por ciento de los Gobernadores son mujeres y, en el FMI, sólo el 2,2 por ciento. A nivel del Consejo de administración, la primera instancia de toma de decisiones en ambas organizaciones, el panorama es más sombrío aún-en el del Banco Mundial solamente 2 son mujeres, y en el FMI, no hay ninguna mujer con estatuto de Director (véase el gráfico abajo).



La OMC no pudo suministrar datos comparables pero lo que sabemos es que sobre los 159 expertos de política comercial seleccionados en 1998 para la lista de disputa de la OMC, el órgano que resuelve litigios relacionados con el comercio, 12 sobre 159 (7,5%) eran mujeres. Sobre los representantes de países que atendieron la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, en Qatar, en noviembre de 2001, 8,4% eran mujeres.

Mientras las mujeres no están presentes en números críticos y no pueden compartir sus experiencias perspectivas distintas, sus preocupaciones no van a ser reconocidas en los debates de la política. Ello es cierto no sólo en las instituciones gubernamentales e intergubernamentales, pero también en las organizaciones de la sociedad civil. Por lo visto, las preocupaciones de las mujeres todavía no son prominentes en el movimiento internacional de protesta contra la mundialización financiera, que estuvo en la primera fila de la redefinición de acercamientos enfocados en promover un desarrollo sostenible y remediar a la desigualdad de ingreso. Las militantes tienen que organizarse entorno a, e influenciar esta lucha, poniéndose a ellas mismas y a su problemática en el orden del día de todas las partes involucradas.

Los retos de la transformación

Las mujeres han reconocido durante décadas que las políticas fundadas en la igualdad entre los sexos y su implementación son fundamentales no sólo para las mujeres, pero

para cualquier plan destinado a la erradicación de la pobreza. Los defensores han insistido que un discurso económico más racional, que beneficie a las personas, abarcaría: una pluralidad de estrategias de desarrollo; un énfasis político en la responsabilidad y la transparencia; un enfoque en las arenas local, nacional e internacional; el reconocimiento que la economía concierne la interacción entre la empresa privada, el sector público y la economía de cuidado; la necesidad de desmitificar a la economía para que fuera accesible para todos; y la identificación de la naturaleza de género de las instituciones financieras y de las políticas macroeconómicas que ellas implementan.

El movimiento femenino mundial sobre la justicia económica ha jugado un rol tremendo en la integración de estos principios y perspectivas de género en general en varias políticas, instituciones y procesos de toma de decisiones. El impacto es vivaz, no sólo en la ONU pero también en instituciones como el Banco Mundial que, a lo largo de las décadas pasadas, vio cada vez más a las mujeres como agentes activos del cambio social y político. Muchas organizaciones transnacionales y gobiernos en el mundo, aunque estén atrasados en términos de respuesta, ahora reconocen que la igualdad entre los sexos es una meta en sí y que debe ser integrada en todos los cuadros del desarrollo.

El mundo está en crisis y no hay más tiempo que perder. Las militantes en la FdD mostraron el camino con un orden del día claro y conciso para alcanzar un desarrollo equitativo y duradero.

Se espera ahora la participación de las mujeres como parte de las negociaciones de la ONU, y las referencias al género, frecuentemente acompañadas de metas de acción específicas y con fecha límite, se pueden encontrar esparcidas en los textos de muchos acuerdos relacionados con el desarrollo socioeconómico.

Surgió un desafío más complejo a la hora de traducir estos acuerdos en unas acciones locales y nacionales que tengan sentido. La mayoría de las negociaciones desembocan en promesas políticas en lugar de obligaciones legalmente constrictivas, lo que vuelve conveniente para los gobiernos que sus palabras queden letra muerta. Aunque la falta de recursos es un problema legítimo, en los países muy pobres en particular, la ausencia de voluntad política es una preocupación mucho más seria. Sin embargo, las mujeres de todas partes del mundo han utilizado los compromisos internacionales para empujar hacia cambios significativos en las leyes, las políticas y las asignaciones de recursos nacionales. Para evocar algunos ejemplos, ellas han ganado cuotas para escaños políticos, han creado nuevos ministerios para la mujer, han ecualizado las leyes relativas a la herencia, han introducido presupuestos nacionales divididos por sexo y han traído a millones de niñas a la escuela.

La búsqueda de la transformación hizo asimismo que las militantes se confrontaran con las organizaciones transnacionales y del sector privado, los mayores inversionistas en los países en desarrollo. Los esfuerzos consistieron en varias campañas enfocadas en problemas tales como mejores compensaciones y condiciones laborales para las obreras en las fábricas, y boicoteos por parte de los consumidores. Estos esfuerzos dieron algunos resultados, puesto que muchas empresas crearon códigos de conducta voluntarios, que rigen los impactos sociales, ambientales y laborales de sus prácticas, tanto dentro como fuera de su país. No obstante, los códigos voluntarios no están bien aplicados, ya que carecen de control, rendición de cuenta y medidas de aplicación. No pueden reemplazar a las leyes nacionales o los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, las mujeres apoyan

mecanismos más fuertes que incluyeran la participación de los gobiernos y de la sociedad civil de los países en desarrollo.

Los logros de las mujeres no se consiguieron sin grandes dificultades. Las militantes tuvieron que luchar para penetrar las estructuras culturales e institucionales, peleándose contra la arraigada resistencia al cambio. Muy a menudo, es menester una tremenda cantidad de tiempo para avanzar, aunque sea a pasitos, y las organizaciones en pro de la mujer están confrontadas con problemas financieros, que limitan su habilidad de participar y disminuyen su impacto potencial.

Progresar: Estrategias para un mundo mejor

Ya es tiempo para implementar los acuerdos, salvar al medio ambiente y acabar con la mundialización de la pobreza y de la injusticia que desbordan detrás de la algarabía de la macroeconomía vigente. Simplemente dicho: El mundo está en crisis y no tenemos más tiempo que perder. Los gobiernos deben ir más allá de la legislación vendaje y de la débil asistencia financiera, y empezar la ejecución de estrategias de desarrollo que respondan a las necesidades de los pobres, no a la riqueza de los ricos.

Un acercamiento al desarrollo basado en los derechos hace de la garantía de los derechos humanos su principal objetivo. Asegura que las acciones de desarrollo apoyen las normas relacionadas con los derechos humanos aceptadas internacionalmente, y estipula que el desarrollo no es exclusivamente un proceso económico, pero que está tejido a través de todos los aspectos de los derechos civiles y humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.

Los acercamientos fundados en los derechos humanos abarcan importantes principios directores para las estrategias de la cooperación internacional y del desarrollo nacional, y ofrecen a las personas, a las mujeres en particular, poderosas herramientas para combatir la pobreza y la marginalización. La integración de los derechos humanos y el desarrollo ayuda a garantizar que los sistemas de gestión, nacionales, regionales e internacionales, sean transparentes y responsables, en parte mediante de la participación reforzada de la sociedad civil. Esta meta global ha de guiar toda la labor con miras a la realización de un desarrollo equitativo y sostenible. Durante el proceso de la FdD, las militantes de los cuatro rincones del mundo han presentado un orden del día claro y conciso para orientarse hacia esta dirección. Otras estrategias e instrumentos generales están presentados más adelante.

1. Los Objetivos de desarrollo para el Milenio (OMD)

A lo largo de la última década, las conferencias de la ONU sobre una serie de tópicos diferentes ha proveído una amplia plataforma para transformar el desarrollo. Los resultados de estas iniciativas fueron ajuntados en septiembre del año 2000, cuando 149 jefes de Estado, una cifra récord, se reunieron en la Sede de la ONU en Nueva York para la Cumbre del Milenio, una parte integrante de la 55ª sesión de la Asamblea General, también conocida como la Asamblea del Milenio. Colectivamente, ellos diseñaron un documento conciso para el desarrollo, la Declaración del Milenio. Incluye ocho objetivos de desarrollo para el Milenio (OMD) que podrían reducir de una manera significativa el porcentaje de personas que viven en la pobreza, y mejorar las normas globales de vida.

Cualquier discusión sobre el cumplimiento de los OMD tiene que empezar con una comprensión de los puestos distintos de hombres y mujeres, niñas y niños en la sociedad. Sin embargo, la Declaración del Milenio no es sofisticada en su acercamiento a la igualdad entre los sexos como medio para erradicar la pobreza, tomando en cuenta algunos de los problemas por los cuales abogaron las mujeres en las últimas décadas. Lo que la salva es que sí contiene algún lenguaje crítico que las mujeres pueden emplear para monitorear las acciones del gobierno en vista a alcanzar los objetivos en el año especificado, 2015.

La Declaración resuelve "promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible", y "luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer". También aborda cuestiones como la educación de las niñas y las tasas de mortalidad maternal.

A fin de influenciar la implementación de los OMD, es crítico que las mujeres presenten sus puntos de vista, primero, a sus propios gobiernos ya que ellos crean las políticas y estrategias. Las mujeres también deben seguir empujando en pro de una ayuda al desarrollo separada por sexo, en términos de cantidad y calidad. Los estudios ya han indicado que la realización de los OMD requeriría un incremento anual de cerca de 50 mil millones de dólares en el volumen de la AOD. Y, al trabajar sobre el nivel sistémico para reestructurar el cuadro macroeconómico, las mujeres deben asegurarse que tanto las políticas como la asistencia financiera están dirigidas hacia la realización de los derechos humanos y de la sostenibilidad.

Para verificar los progresos cumplidos hacia los OMD, la ONU ha establecido una iniciativa basada en investigación, información y campañas para galvanizar la coordinación y la conexión. El Proyecto de Análisis del Milenio consta de diez equipos especiales con un amplio abanico de temas relacionados con las políticas y prácticas innovadoras. Las oficinas de país del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en colaboración con los gobiernos nacionales, el sector privado y la sociedad civil, compilará los informes de países detallando los avances y los obstáculos. Una Campaña del Milenio, principalmente conducida por la sociedad civil en los niveles tanto nacional como mundial, buscará recoger un amplio apoyo público y político, pero es vital que las perspectivas y la representación de las mujeres fuesen integradas en este proceso crítico. Y, las mujeres tendrán que desarrollar procesos de monitoreo independiente para asegurarse que se responderá plenamente a sus necesidades.

Las mujeres piden la integración de los análisis del género en todas las tomas de decisiones económicas, y el reconocimiento por parte del gobierno de sus vitales contribuciones a las economías nacionales, más allá del nivel micro-económico.

2. Mantenimiento del compromiso, hacer que tenga sentido

La iniciativa de la ONU invita específicamente a la sociedad civil, y es vital que las mujeres participen en ella, así como en el seguimiento de las actividades de la ONU en general. La participación activa lleva a una mayor transparencia, a la rendición de cuentas y a la inclusión de la sociedad civil en todos los foros de la toma de decisiones. Al contrario de las instituciones de Bretton Woods (IBW) y de la OMC, la ONU está

relativamente abierta a las ONG, (aunque algunos militantes empiezan a poner en tela de juicio la profundidad real de su acceso a la toma de decisiones allí, debido a las restricciones que ciertos gobiernos intentaron imponerle en conferencias recientes).

Tanto en Monterrey como en el primer evento del proceso de seguimiento, la reunión celebrada en abril de 2002 entre el Consejo Económico y Social y las IBW, los representantes de la ONG notaron que, aunque pronunciaron discursos y tomaron parte en los debates, se dio poco peso a sus contribuciones. La síntesis de las charlas en las mesas redondas, por ejemplo, contenía raramente las intervenciones de las ONG. Era más común la mención retórica del significado de la participación de la sociedad civil. Las mujeres en particular han invitado a explorar los medios para dar más sentido a los aportes de las ONG, puesto que para muchas ONG femeninas, las limitaciones institucionales representan solamente unas de las barreras para la participación, empezando por los niveles bajos de los recursos humanos y financieros. La ausencia de las mujeres en la toma de decisiones económicas reduce asimismo el alcance de la atención dada a las mujeres y a sus posiciones. Esta tendencia continúa pese a varios acuerdos internacionales para apoyar una representación igualitaria.

Y fue obvio que en Monterrey, donde las referencias a cambios sistémicos o a los análisis de género que hubieran significado una real diferencia para las mujeres, fueron ausentes del documento final. Las mujeres han sido profundamente decepcionadas por el "consenso" que emergió, especialmente tras su dedicada participación a lo largo de los dos años del proceso. Mientras las militantes elaboran nuevas estrategias para seguir trabajando sobre la FdD, los OMD y el seguimiento de los debates de la ONU en general, es menester proceder a una evaluación continua del impacto de esta labor. Las mujeres tienen la sabiduría y la experiencia y sería imposible alcanzar estas metas sin su significativa participación.

3. Integración y Monitoreo

Pese a las largas y constantes luchas de las mujeres para dar una dimensión de género a la manera en que los gobiernos se acercan de la toma de decisiones macroeconómicas, ésta sigue involucrando a un pequeño porcentaje de mujeres, y termina con poco o inclusive no reconocimiento del género, resultando en estrategias y planos de acción que ponen trabas a las mujeres y frenan los esfuerzos de erradicación de la pobreza.

Las mujeres han solicitado una integración del género y la incorporación del análisis de género en todas las tomas de decisiones económicas; han desafiado a los gobiernos para que reconozcan los roles y las contribuciones de la mujer en las economías nacionales más allá del nivel macroeconómico. Si bien las iniciativas de micro-crédito, elogiadas con exageración, son medidas importantes para el incremento de los recursos y del capital de las mujeres, ellas solas no eliminarán las barreras que confrontan las mujeres en el acceso a los mercados y a los recursos financieros. Las políticas macroeconómicas que atañen a los acuerdos comerciales y de préstamo, la agroindustria, la distribución de la tierra y la gestión de los impuestos, han de incorporar una consideración de las implicaciones de género.

Un importante punto de arranque para abogar por políticas que tomen en cuenta la diferencia entre hombres y mujeres es el monitoreo de lo que distintos actores macroeconómicos han prometido hacer, lo que dicen y lo que están haciendo de hecho. Las actividades de monitoreo llevadas a cabo por las mujeres se aceleraron después de la

conferencia de Beijing, celebrada en 1995, pero existe ahora una necesidad de coordinar estos esfuerzos de un modo más coherente.

4. Separar las cifras por género

Un instrumento que necesita una mayor atención es la separación de los datos por género en cuanto que indicador de la igualdad de género. Sin este tipo de datos, no es posible medir y vigilar el impacto de las políticas económicas sobre las mujeres, en comparación con los hombres.

En el mercado del empleo, por ejemplo, las cifras separadas por género podrían ayudar a mejorar las perspectivas de las mujeres en lo que atañe a empleos y servicios financieros, canalizando los fondos públicos hacia la edificación de las capacidades económicas de las mujeres y garantizando sus derechos. Para los gobiernos que intentan incrementar el crecimiento económico bajo condiciones socialmente responsables, estos datos son esenciales, y deberían ser aplicados en los análisis de las políticas a todos los niveles, nacional, provincial y local.

Las mujeres están en el puesto delantero para identificar los impactos devastadores del sistema macroeconómico, ya que soportaron durante muchos años el bulto de las consecuencias de los programas de ajuste estructural, debilitadores.

5. Calcular los presupuestos por género

Desde la conferencia de Beijing, las mujeres enfocaron estrechamente en la importancia de los acercamientos atentos al género en las asignaciones presupuestarias. Los presupuestos por género examinan el impacto de las políticas del gobierno sobre las mujeres y las niñas, comparado al de los hombres y niños, dentro de cualquier grupo socioeconómico dado. Los presupuestos nacionales son de suma importancia, puesto que indican cómo la mayor parte de los recursos públicos están movilizados y distribuidos, y los modos en que los gobiernos cumplen con sus responsabilidades sociales y económicas.

Al relacionar los gastos con los compromisos hechos por los gobiernos en pro de los derechos de la mujer y de la igualdad entre los sexos, las iniciativas presupuestarias basadas en el género ayudan a incitar sus gobiernos a la rendición de cuentas. Idealmente, los presupuestos nacionales buscan erradicar la pobreza y corregir las desigualdades en los recursos-los presupuestos basados en el género son un paso crucial para calcular si ello se está realizando o no. Los países que han conducido iniciativas presupuestarias atentas al género ya han empezado a recoger los beneficios, puesto que la práctica ayuda a suprimir los impedimentos sobre la macroeconomía, al beneficio de toda la sociedad. Los resultados del crecimiento económico y del desarrollo humano mejoran simultáneamente de un modo que continua a alentar la autonomización de la mujer.

6. Abrirse al mundo

Las estrategias de proximidad desempeñan un papel importante en los esfuerzos de abogacía de las mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil y de los decisores. Las iniciativas futuras tienen que promover políticas económicas sostenibles y basadas sobre el género, mejorar la alfabetización económica de los grupos femeninos y del público en

general, e incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas. Cabe también desplegar esfuerzos para formar a los decisores sobre el rol fundamental que juegan los derechos económicos de las mujeres en la economía, en el sentido más amplio de la palabra, y efectuar más investigación e incrementar los datos separados por género. Es menester que estas actividades se lleven a cabo no sólo a nivel nacional, pero también dentro de las instituciones comerciales y financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC) y de las Naciones Unidas a través de los procesos de seguimiento de la FdD.

Conclusión

Las mujeres estuvieron siempre en la primera fila de los partidarios de las alternativas al actual cuadro neoliberal. El monitoreo, la integración de la dimensión del género, los datos separados por sexo, las iniciativas presupuestarias basadas en el género, las estrategias de proximidad multifacéticas, la participación, las recomendaciones de políticas, y una presión continua a favor de nuevos acercamientos, son todas las avenidas que las mujeres han tomado para transformar la teoría y la práctica de la corriente económica. Mientras las alternativas están sobre la mesa, el movimiento de las mujeres ha de volverse más fuerte para empujar los gobiernos a tomar acción con vista a un mundo mejor. Es necesario construir y enlazar continuamente las organizaciones y las redes femeninas dentro y entre las regiones, y volverse cada vez más multidisciplinarias, tejiendo la abogacía de las mujeres a favor de la justicia económica mediante la pericia en los derechos humanos, el medio ambiente y la arena política. Con sus ricas experiencias y estrategias exhaustivas elaboradas a partir de una profunda comprensión de la sostenibilidad, de la igualdad y de los derechos humanos, las mujeres tienen un rol único que jugar con miras a la creación de un paradigma de desarrollo que no sea comprometido por la omnipotencia del mercado.